



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMA A-5

SESIÓN PÚBLICA NÚM. 55 ORDINARIA

JUEVES 15 DE JUNIO DE 2017

En la Ciudad de México, siendo las once horas con cuarenta y ocho minutos del jueves quince de junio de dos mil diecisiete, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTA

Se sometió a consideración el proyecto de acta de la sesión pública número cincuenta y cuatro ordinaria, celebrada el martes trece de junio del año en curso.

Por unanimidad de once votos, el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del jueves quince de junio de dos mil diecisiete:



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
198/2016
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Incidente de inejecución de sentencia 198/2016, respecto de la dictada el catorce de julio de dos mil catorce por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, en auxilio del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, en el juicio de amparo 789/2014, promovido por [REDACTED] y otros. En el proyecto formulado por el señor Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se propuso: *“PRIMERO. Es fundado el incidente de inejecución de sentencia, por lo que respecta a los funcionarios del Municipio de Nacajuca, Tabasco, en funciones en el periodo dos mil trece al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. SEGUNDO. Consígnese a [REDACTED] quien ocupó el cargo de Presidente Municipal de Nacajuca, Tabasco; [REDACTED] [REDACTED], quien ocupó el cargo de Síndico de Hacienda del Municipio de Nacajuca, Tabasco; [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Y., [REDACTED] y [REDACTED] quienes ocuparon los cargos de Regidores del Municipio de Nacajuca, Tabasco, ante el Juez de Distrito en el Estado de Tabasco, en turno, por haber incumplido la sentencia constitucional de catorce de julio de dos mil catorce, dictada en el juicio de amparo 789/2014, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, de acuerdo con lo previsto en la fracción*



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a fin de ser juzgados y sancionados por la desobediencia cometida, en los términos previstos por el artículo 267 de la Ley de Amparo vigente. TERCERO. Es infundado incidente de inejecución de sentencia, por lo que respecta a los funcionarios del Municipio de Nacajuca, Tabasco, en funciones en el periodo del uno de enero de dos mil dieciséis al cuatro de octubre de dos mil dieciocho, al considerarse excusable el incumplimiento a la sentencia de amparo, por lo que por el momento no se está en el caso de aplicar las sanciones que prevé la fracción XVI del artículo 107 constitucional. CUARTO. Devuélvanse los autos de este expediente al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco para los efectos precisados en el apartado décimo cuarto de esta ejecutoria. QUINTO. Se deja sin efectos el dictamen de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis emitido por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, en el incidente de inejecución de sentencia 7/2016 de su índice”.

El señor Ministro Pérez Dayán explicó que, a partir de la reforma constitucional de dos mil once en materia de derechos humanos, este Tribunal Pleno puede revisar, en incumplimientos de sentencia, no sólo la actuación de las autoridades actuales, sino de las que, en su momento, tuvieron la responsabilidad de acatar una sentencia de amparo y no lo hicieron.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

En el caso concreto, apuntó que, si bien se demostró que algunas de las actuaciones de los entonces integrantes del Municipio de Nacajuca intentaron gestiones administrativas necesarias para lograr cumplir el laudo correspondiente, como la solicitud del aumento presupuestal, es evidente una diferencia sustantiva entre las acciones de aquéllos y las de los actuales integrantes, quienes no sólo intentaron un presupuesto superior, sino que además obraron con eficacia, aun cuando sólo han cumplido parcialmente la ejecutoria.

Bajo esa perspectiva, se manifestó de acuerdo con el proyecto en todos sus puntos resolutivos.

Por tanto, las votaciones definitivas deberán indicar:

Se aprobó por mayoría de seis votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Pardo Rebolledo, Medina Mora I., Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto de los puntos resolutivos primero y segundo, en vinculación con los apartados XI, XII, XIII y XIV relativos, respectivamente, al estudio, a la decisión, a las sanciones a imponerse y a los actos que se deben efectuar para el cumplimiento a la sentencia de amparo. Los señores Ministros Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Piña Hernández y Laynez Potisek votaron en contra.

Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto de los puntos resolutivos tercero, cuarto y quinto, en vinculación con los apartados XI, XII, XIII y XIV relativos, respectivamente, al estudio, a la decisión, a las sanciones a imponerse y a los actos que se deben efectuar para el cumplimiento a la sentencia de amparo.

Por instrucciones del señor Ministro Presidente Aguilar Morales, el secretario general de acuerdos leyó los puntos resolutivos que regirán el presente asunto, en los siguientes términos:

“PRIMERO. Es fundado el incidente de inejecución de sentencia, por lo que respecta a los funcionarios del Municipio de Nacajuca, Tabasco, en funciones en el período dos mil trece al treinta y uno de diciembre de dos mil quince.

SEGUNDO. Consígnese a [REDACTED] quien ocupó el cargo de Presidente Municipal de Nacajuca, Tabasco; [REDACTED] quien ocupó el cargo de Síndico de Hacienda del Municipio de Nacajuca, Tabasco; [REDACTED]

*[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] y [REDACTED]*

quienes ocuparon los cargos de Regidores del Municipio de Nacajuca, Tabasco, ante el Juez de Distrito en el Estado de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Tabasco, en turno, por haber incumplido la sentencia constitucional de catorce de julio de dos mil catorce, dictada en el juicio de amparo 789/2014, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, de acuerdo con lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a fin de ser juzgados y sancionados por la desobediencia cometida, en los términos previstos por el artículo 267 de la Ley de Amparo vigente. TERCERO. Es infundado incidente de inejecución de sentencia, por lo que respecta a los funcionarios del Municipio de Nacajuca, Tabasco, en funciones en el período del uno de enero de dos mil dieciséis al cuatro de octubre de dos mil dieciocho, al considerarse excusable el incumplimiento a la sentencia de amparo, por lo que por el momento no se está en el caso de aplicar las sanciones que prevé la fracción XVI del artículo 107 constitucional. CUARTO. Devuélvanse los autos de este expediente al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco para los efectos precisados en el apartado décimo cuarto de esta ejecutoria. QUINTO. Se deja sin efectos el dictamen de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis emitido por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, en el incidente de inejecución de sentencia 7/2016 de su índice”.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la congruencia formal de los puntos resolutivos, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el siguiente asunto de la lista:

II. 33/2017

Incidente de inejecución de sentencia 33/2017, respecto de la dictada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Mérida, Yucatán, en apoyo a las labores del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el recurso de revisión R.A. 26/2016, promovido por [REDACTED]. En el proyecto formulado por el señor Ministro Eduardo Medina Mora I. se propuso: *“PRIMERO. Es fundado el incidente de inejecución de sentencia a que este toca se refiere. SEGUNDO. Queda inmediatamente separado de su cargo [REDACTED] actual Titular de la Delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México, por haber incumplido la sentencia pronunciada en el recurso de revisión 26/2016, derivado del juicio de amparo indirecto 38/2016. TERCERO. Consígnese a [REDACTED] actual Titular de la Delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México, ante el Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México en turno, por el desacato a una sentencia de amparo*



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

de acuerdo con lo previsto en la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución Federal, a fin de que sea juzgado y sancionado por la desobediencia cometida, en los términos previstos por el artículo 267 de la Ley de Amparo vigente. CUARTO. Para los efectos mencionados en la parte final del Considerando Tercero de esta resolución, déjese el presente incidente de inejecución de sentencia abierto y requiérase a la autoridad ahí señalada el cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los términos especificados”.

El señor Ministro ponente Medina Mora I. recordó que, en la sesión anterior se dio cuenta con diversos documentos que aparentemente acreditaron el cumplimiento parcial de la ejecutoria de amparo; sin embargo, se debe acreditar el cumplimiento cabal y completo de la resolución, en términos del artículo 192, párrafos primero y tercero, de la Ley de Amparo.

Por tanto, solicitó retirar el asunto para analizar la totalidad de las constancias remitidas y, en su momento, volver a presentar otra propuesta de resolución.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales acordó retirar el asunto de la lista.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el siguiente asunto de la lista:

III. 17/2016

Incidente de cumplimiento sustituto 17/2016, de la sentencia dictada el tres de septiembre de dos mil quince por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, en



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

el amparo en revisión R.A. 68/2015, promovido por el Ejido La Escondida, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas. En el proyecto formulado por el señor Ministro Javier Laynez Potisek se propuso: *“PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que es procedente el cumplimiento sustituto de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 231/2014-I, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, solicitado por el quejoso. SEGUNDO. Remítanse los autos del juicio de amparo a su lugar de origen, para los efectos precisados en el último considerando de la presente resolución”*.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta de los apartados I, II, III y IV relativos, respectivamente, a los antecedentes, al trámite, a la competencia y a las consideraciones y fundamentos, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro ponente Laynez Potisek presentó los apartados V y VI relativos, respectivamente, al estudio y a la decisión.

Precisó que la materia del presente incidente consiste en determinar si es correcta o no la opinión del juez de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

distrito en cuanto a la existencia de la imposibilidad jurídica para el cumplimiento de la sentencia de amparo.

Narró los antecedentes del asunto: 1) se afectó una parte del ejido para la construcción de la obra pública consistente en la ampliación de la carretera Reynosa-Matamoros, 2) el ejido promovió juicio de amparo, el juez de distrito lo otorgó y, una vez recurrido ante el tribunal colegiado, se confirmó para el efecto de que se le restituya en su derecho, porque no hubo garantía de audiencia en la afectación, y se señaló que, en caso de existir imposibilidad jurídica o material, se atendiera lo previsto en los artículos 204 y 205 de la Ley de Amparo, 3) se requirió el cumplimiento a las autoridades para que restituyan las tierras, pero el propio ejido solicitó la apertura del incidente de cumplimiento sustituto e, incluso, aportó prueba pericial, y 4) el juez de distrito emitió sentencia interlocutoria, en el sentido de que procede el cumplimiento sustituto y realizó una serie de dictámenes periciales, a saber, combinando el desahogo de las periciales conforme a la Ley de Amparo — para el inicio del incidente— y el Código Federal de Procedimientos Civiles —para el desahogo propiamente—, por ejemplo, además de un perito oficial, hubo peritos de las partes y después se citó a un tercero.

El proyecto propone determinar la procedencia del cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo, ante la imposibilidad jurídica y material para restituir los bienes y porque se afectaría más a la colectividad que se beneficiaría



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

el quejoso con la restitución de las tierras, aunado a que fue el propio ejido el que, al ver la obra concluida, solicitó el cumplimiento sustituto. Precisó que, de las constancias de autos, se advierte que únicamente es cosa juzgada la superficie del terreno.

Hizo hincapié en que, por la época en que se listó el proyecto, se valoraron las pruebas periciales conforme al Código Federal de Procedimientos Civiles; sin embargo, recientemente se resolvió por la Segunda Sala una contradicción de tesis, vía la cual se determinó que debe aplicarse la Ley de Amparo para tal efecto, lo que coincide con el criterio de este Tribunal Pleno.

Modificó el proyecto para: 1) remitir a la Ley de Amparo en la valoración de las pruebas periciales correspondientes, 2) ordenar al juez de distrito abrir el incidente respectivo conforme a la Ley de Amparo y, posteriormente, analizar las periciales que, en su caso, se presenten, o bien, validar las ya presentadas, 3) no fijar la fecha de la afectación —se proponía que fuera a partir de la demanda de amparo—, por lo que corresponderá al juez de distrito establecerla, y 4) cambiar del párrafo ochenta y uno la norma aplicable, es decir, no invocar la Ley de Expropiación para establecer el valor comercial, sino la Ley Agraria, al tratarse de un ejido.

El señor Ministro Cossío Díaz se manifestó de acuerdo con el proyecto modificado; no obstante, indicó que, del contenido de los párrafos ochenta y siete —“No escapa a este Tribunal Pleno que mediante oficio recibido el dieciocho



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

de marzo de dos mil dieciséis en el juzgado de distrito, la Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas realizó diversas manifestaciones al A Quo con relación al cumplimiento del fallo de garantías, en particular respecto de las dimensiones de la superficie afectada; sin embargo, al respecto, deberá estarse a lo ordenado en la presente resolución y en la ejecutoria de amparo; esto, pues lo relativo a la superficie afectada constituye un pronunciamiento analizado por el tribunal colegiado, el cual quedó firme y, por consiguiente, es inmutable”— y ochenta y ocho —“De igual manera, no escapa a este tribunal que a través de oficio presentado en el juzgado de distrito el catorce de junio de dos mil dieciséis, el Secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, por conducto de su autorizado, manifestó al juez que no es voluntad de esa autoridad adquirir, ni ocupar, el polígono 4 de las superficies afectadas, por lo cual la quejosa puede disponer de éste; sin embargo, al respecto, toda vez que como se ha indicado, la superficie total afectada quedó determinada en la ejecutoria de amparo, el hecho de que en este momento la autoridad responsable manifieste no querer ocupar esa porción de predio, no permite la devolución al ejido quejoso; máxime que desde la demanda de amparo se pidió que ante la ejecución de los trabajos de ampliación reclamados, le fueran pagadas las superficies ocupadas”— se da a entender que se forzaría a la autoridad a adquirir un polígono del terreno del que expresamente manifestó no ser su voluntad hacerlo.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Recordó que, en torno al tema, se han emitido diversos precedentes en ambos sentidos: ordenar la indemnización de todo el terrero o sólo de ciertas partes. En ese tenor, externó duda en cuanto a qué se decidirá en este caso.

La señora Ministra Piña Hernández estimó conveniente precisar que el amparo no se concedió por violación a la garantía de audiencia, sino por vulnerar el derecho de propiedad, como se advierte de la resolución del recurso ante el tribunal colegiado.

Se pronunció en contra de una de las modificaciones del proyecto, al considerar que la tramitación del incidente debería fundamentarse en el Código Federal de Procedimientos Civiles.

En cuanto a la procedencia del cumplimiento sustituto, recordó que el juez de distrito otorgó el amparo para que se restituyeran los terrenos y, de existir imposibilidad material y jurídica para hacerlo, sujetarse a lo previsto en los artículos 204 y 205 de la Ley de Amparo; por otra parte, la autoridad manifestó poner a disposición de la quejosa cierto polígono de dicho terreno; por ende, indicó que se debe analizar cuál será la materia de la restitución, objetivo principal de una sentencia de amparo, y cuál de la indemnización por imposibilidad jurídica y material de restitución, como parte de su cumplimiento sustituto.

La señora Ministra Luna Ramos adelantó estar de acuerdo con los puntos resolutivos, con algunas propuestas



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

de cambio en la parte considerativa del proyecto, las cuales, de no aceptarse, motivarían un voto concurrente.

Narró los antecedentes del asunto: 1) se expropió o desposeyó una parte de un ejido y se construyó una carretera, por lo que no podían devolver todo el ejido, y 2) el ejido solicitó el cumplimiento del amparo a través del cumplimiento sustituto, es decir, un incidente de pago de daños y perjuicios, conforme a los artículos 204 y 205 de la Ley de Amparo.

Recapituló que el cumplimiento sustituto procede cuando no hay posibilidad de cumplir el amparo normalmente, o sea, a través de restablecer las cosas al estado que guardaban antes del acto reclamado y, en el caso, no se pueden retrotraer porque se construyó una carretera y está funcionando, por lo que la sociedad se beneficia mayormente.

Apuntó que, respecto del citado numeral 204, se emitió el Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, en cuyo considerando séptimo se estipuló que “Tomando en cuenta que en términos de lo previsto en el párrafo tercero de la fracción XVI del artículo 107 constitucional, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación le corresponde determinar en definitiva si procede el cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo a petición de parte o de oficio, y que en el párrafo tercero del artículo 205 de la Ley de Amparo se establece que la solicitud correspondiente se presentará ante esta Suprema



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Corte o bien, por conducto del órgano jurisdiccional a partir del momento en que dichas sentencias causen ejecutoria, debe estimarse que tratándose del cumplimiento sustituto a petición de parte, el incidente respectivo se debe substanciar por conducto del tribunal que conoció de la primera instancia del amparo respectivo, y en el supuesto de que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a los diversos requisitos señalados en el citado precepto constitucional estime procedente el referido cumplimiento, emitirá la opinión correspondiente y la remitirá a este Alto Tribunal para que el Pleno resuelva lo conducente; en cambio, si estima que el referido cumplimiento es improcedente, emitirá resolución impugnante en términos de lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso h), de la Ley de Amparo”, lo cual ha dado pauta para sustentar diferentes criterios interpretativos por parte de los señores Ministros: 1) quienes estiman que, en el momento en que se presenta la solicitud de cumplimiento sustituto por la parte quejosa, el juez de distrito debe analizar si procede o no el cumplimiento sustituto y, en consecuencia, emitir una opinión y remitir el asunto a esta Suprema Corte para determinar si se confirma o no esa opinión y, después, regresar el asunto al juzgado para que sustancie el cumplimiento sustituto —como en el caso concreto, en el que, además, sustanció todo el procedimiento, desahogó diversas pruebas periciales con base en el Código Federal de Procedimientos Civiles y fijó el monto a pagar, por lo que se estaría en el supuesto de la tesis P. VI/2016 (10a.) de rubro “CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE LAS SENTENCIAS



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

DE AMPARO. CASO EN EL QUE EL ÓRGANO DE AMPARO EXCEDE SUS ATRIBUCIONES EN LA SUBSTANCIACIÓN DE DICHO INCIDENTE”—, y 2) quienes consideran que no debe conducirse así el juez de distrito.

Señaló que, si se determina que el actuar del juez de distrito fue correcto y se le regresará el asunto, deberá resolverse si se desahogarán de nuevo las pruebas periciales o si se convalidarán las ya desahogadas. Estimó que debe ordenarse al juez de distrito, en primer término, que valore si las pruebas periciales fueron correctamente ofrecidas, en cuanto a si los peritos que aceptaron y protestaron el cargo estaban dentro de los rangos profesionales y, en segundo término, si las pruebas desahogadas fueron o no correctas. Preciso no estar conforme con que las periciales se hayan desahogado con fundamento en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Como, dada la resolución de la contradicción de tesis referida, en el sentido de que debe ser con la Ley de Amparo, mas no propiamente el incidente de daños y perjuicios porque, si bien está establecido y reconocido en los artículos 204 y 205 de la Ley de Amparo, no se indica una forma de sustanciación, por lo que debe acudir al Código Federal de Procedimientos Civiles.

Abundó que, en el caso, no existe agravio expreso en cuanto a que las periciales fueron mal desahogadas ante el juez de distrito y, por tanto, debe ordenársele que valore si las pruebas fueron correctamente tramitadas y



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

desahogadas, como precisó anteriormente, con el fin de determinar el monto correspondiente.

En cuanto al monto, coincidió con los señores Ministros Cossío Díaz y Piña Hernández en que, desde la sentencia de amparo, se fijó una superficie —34,616.45 metros cuadrados—, siendo que la autoridad pretende devolver una parte, por lo que no existe inconveniente para ello, mas eso será materia de valoración por parte del juez de distrito en el incidente de daños y perjuicios que tramite con ese fin, en la inteligencia de que, si las partes no están conformes con la determinación que llegue a tomarse, tienen expedito el recurso de queja ante el tribunal colegiado, en términos del artículo 97, fracción I, inciso h), de la Ley de Amparo.

Propuso que los puntos resolutivos indiquen: primero, que este Tribunal Pleno determina que es procedente el cumplimiento sustituto de la sentencia, segundo, que debe de quedar sin efectos la determinación del monto del juez de distrito y que se devuelve el asunto, precisamente, para fijar el monto del cumplimiento sustituto respecto de la parte del terreno que no se devolverá, y que tienen expedito su derecho las partes para impugnar la resolución mediante la queja, en caso de que no estuvieran de acuerdo.

El señor Ministro ponente Laynez Potisek reiteró que el juez de distrito combinó la aplicación de la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles para el desahogo de las periciales, porque nombró un perito oficial y las partes ofrecieron sus periciales, por lo que se le debe



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

instruir para revisar la idoneidad de los peritos y, en su caso, decidir si debe realizarse o no la pericial nuevamente.

Externó preocupación por restar un polígono del terreno del cumplimiento sustituto del amparo, en tanto que los párrafos sesenta, sesenta y uno y sesenta y dos de la propuesta rezan: “Como puede advertirse, no existió coincidencia entre los dictámenes periciales rendidos; sin embargo, el resultado de esas pruebas no fue determinante en la sentencia de amparo, pues el juez de distrito sólo la estimó para constatar la existencia de la afectación reclamada, pero no así para establecer la magnitud de ésta; es decir, ese medio de prueba fue útil para comprobar que los actos reclamados afectaron la propiedad de la quejosa, pero sin que se realizara pronunciamiento alguno en cuanto a la superficie afectada. No obstante, en el recurso de revisión interpuesto en contra de ese fallo, el tribunal colegiado declaró fundado un agravio de la parte quejosa y, además de concluir la existencia de la afectación, ese órgano se pronunció en cuanto a la dimensión de la afectación, para lo cual analizó las pruebas periciales en comento, concluyendo que el dictamen con mayor eficacia demostrativa era el emitido por el perito oficial; por ende, concedió el amparo y ordenó la restitución de 03-46-16,45 hectáreas (34,616.45 metros cuadrados) a favor del Ejido “La Escondida”, o bien, de existir imposibilidad material y jurídica para hacerlo estableció que debería atenderse a lo previsto en los artículos 204 y 205 de la Ley de Amparo. Ante tal determinación, durante la etapa de ejecución y en el



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Incidente de cumplimiento sustituto, el juez de Distrito partió en todo momento que la superficie afectada objeto de la restitución fue la precisada; esto, al estimar que tal determinación tiene el carácter de cosa juzgada por haber sido analizada por el tribunal colegiado en el referido recurso de revisión”.

Con lo anterior, concluyó que, independientemente de que en la etapa actual del procedimiento la autoridad manifieste su voluntad para devolver una porción del terreno, existe una superficie determinada como cosa juzgada y, ante la solicitud del ejido para su cumplimiento sustituto, la indemnización debe darse para toda esa superficie. Adelantó que, si el Tribunal Pleno decide lo contrario, ajustaría el engrose en consecuencia.

La señora Ministra Luna Ramos precisó que la cosa juzgada radicó en la cantidad de 03-46-16,45 hectáreas, por lo que, tomando en cuenta que el efecto principal de las sentencias de amparo es la restitución en el goce del derecho violado, no se vulneraría esa institución jurídica de resolverse la devolución del terreno en la porción ofrecida por la autoridad demandada y de indemnizarse por el resto; no obstante, ello debe ser motivo de valoración del juez de distrito en el incidente de mérito.

El señor Ministro Cossío Díaz recordó que, en el incidente de inejecución de sentencia 814/2010, se resolvió en el sentido de restituir una parte del terreno e indemnizar respecto del resto, lo cual concuerda con la lógica del



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

artículo 107, fracción XVI, constitucional, en cuanto a las condiciones del cumplimiento sustituto, y concordó con las señoras Ministras Piña Hernández y Luna Ramos en que eso no se debe determinar en este momento, sino que, en el incidente respectivo que tramite el juez de distrito para tal efecto, se apreciarán las condiciones fácticas particulares que se susciten, por lo que no debe negarse esa posibilidad desde la resolución de esta Suprema Corte.

El señor Ministro Pérez Dayán recontó que el efecto de la sentencia, por disposición del tribunal colegiado, fue: “En este sentido, existe un acto privativo del derecho de propiedad de tierras, emitido para realizar una ampliación de una carretera, pero sin que se haya tramitado un procedimiento de expropiación. Luego, como en el caso no está demostrado que antes de la ejecución de los trabajos de ampliación de esa obra se haya otorgado garantía de audiencia al ejido quejoso, no resulta posible otorgar esa derecho pues ya existen pruebas periciales las cuales demuestran que el inmueble ya fue materialmente afectado sin la existencia de un procedimiento para tal efecto. Con base en lo expuesto, es incorrecto el efecto del amparo otorgado en la sentencia recurrida pues al no existir un procedimiento y si haberse materializado la afectación en los terrenos propiedad de la quejosa, no era viable otorgar el amparo a efecto de que se respete la garantía de audiencia previa”, por lo que, atendiendo a lo anterior y con base en los dictámenes periciales, determinó que los actos reclamados afectaron una superficie de 34,616.45 metros cuadrados y,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

en consecuencia puntualizó que “Así, el efecto del fallo de amparo debe consistir en que el ejido quejoso sea restituido en el derecho de audiencia previa vulnerado o, en su caso, de existir imposibilidad jurídica o material para ello, se atienda a lo previsto en los artículos 204 y 205 de la Ley de Amparo”, es decir, no consideró la posibilidad de una restitución, sino que resolvió evaluar y pagar una cantidad.

Reconoció que no se trata de un cumplimiento sustituto, sino que el efecto de la sentencia de amparo fue, por no haber posibilidad de audiencia, pagarle al quejoso el valor del terreno afectado del que no existe posibilidad de restituírsele. Aclaró que se tramitó el cumplimiento sustituto por así haberlo solicitado el ejido quejoso e inmediatamente así haberlo tramitado el juez de distrito. En ese contexto, recontó que la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Tamaulipas, en contestación a lo anterior, expresó la posible devolución a la quejosa de la parte no utilizada del predio afectado; no obstante, el tribunal colegiado modificó la sentencia del juez de distrito, no por considerar violada la garantía de audiencia, sino porque pericialmente se demostró que el terreno no se puede restituir y, por tanto, se debe pagar la superficie afectada, por lo que la única alternativa en este caso es determinar una cantidad y que se pague.

El señor Ministro Franco González Salas se posicionó en favor del proyecto modificado, y precisó que, en cuanto a los precedentes de este Tribunal Pleno relativos a si se



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

puede restituir una parte del predio afectado e indemnizar por otra, eso debe ser materia de valoración y decisión por parte del juez de distrito.

Reflexionó que, si en el caso se afectó un ejido para construir una carretera, lo más probable es que quedara dividido por dicho camino, por lo que los fragmentos de terreno restantes no resultarían útiles para fines agrícolas, por lo que sería injusta su restitución, lo que debería tomarlo en cuenta el juez de distrito, máxime que existe un precedente con un criterio similar.

La señora Ministra Piña Hernández precisó que el efecto del amparo respondió a que se afectó la propiedad de la quejosa sin mediar procedimiento de expropiación alguno y, si bien se violó su garantía de audiencia, se afectó finalmente su derecho de propiedad y, por eso, el tribunal colegiado estableció la obligación de restituir la propiedad afectada, en los siguientes términos: “el ejido quejoso debe ser restituido en el goce del derecho fundamental de propiedad conculcado, o de existir imposibilidad material y jurídica para hacerlo de parte de las responsables sujetarse a lo previsto en los artículos 204 y 205 de la Ley de Amparo”.

Aclaró que ésta no es la primera vez en que se analiza este tipo de efectos en una sentencia de un tribunal colegiado: adelantan la posibilidad de que la autoridad no restituya el terreno. Hizo hincapié en que el tribunal colegiado puntualizó la superficie de 03-46-16,45 hectáreas y, si la autoridad propone poner a disposición del quejoso



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

cierto polígono, coincidió con los señores Ministros Luna Ramos, Cossío Díaz y Franco González Salas en que estas cuestiones le corresponden al juez de distrito, por lo que esta Suprema Corte no debiera pronunciarse al respecto, sino únicamente en cuanto a que procede el cumplimiento sustituto y se devuelva el asunto al juez de distrito para los efectos conducentes, cuya resolución podrá ser revisable por un tribunal colegiado mediante recurso de queja.

Por esa razón, sugirió eliminar los párrafos citados por el señor Ministro Cossío Díaz. De no aceptarse eso, adelantó que formularía voto concurrente.

El señor Ministro Pérez Dayán, en cuanto a la participación de la señora Ministra Piña Hernández, recalcó que el tribunal colegiado resolvió que “Son fundados los agravios formulados por el ejido quejoso, los cuales se analizan en suplencia de la queja deficiente, puesto que el juez de Distrito indebidamente determinó el acto reclamado y, en consecuencia, también es incorrecto el análisis de los conceptos de violación efectuado. [...] En este sentido, existe un acto privativo del derecho de propiedad de tierras, emitido para realizar una ampliación de una carretera, pero sin que se haya tramitado un procedimiento de expropiación. Luego, como en el caso no está demostrado que antes de la ejecución de los trabajos de ampliación de esa obra se haya otorgado garantía de audiencia al ejido quejoso, no resulta posible otorgar esa derecho pues ya existen pruebas periciales las cuales demuestran que el inmueble ya fue



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

materialmente afectado sin la existencia de un procedimiento para tal efecto. Con base en lo expuesto, es incorrecto el efecto del amparo otorgado en la sentencia recurrida pues al no existir un procedimiento y si haberse materializado la afectación en los terrenos propiedad de la quejosa, no era viable otorgar el amparo a efecto de que se respete la garantía de audiencia previa. Así, luego de analizar los dictámenes periciales rendidos por los expertos ofrecidos por las partes, se concluyó lo siguiente: - Los trabajos reclamados afectaron una parte de los terrenos de la parte quejosa. - Esos trabajos se emitieron sin que exista un procedimiento de expropiación. - El peritaje que genera mayor convicción jurídica es el rendido por el perito oficial, por lo que debe reconocérsele valor probatorio. - Los actos reclamados afectaron una superficie de 34,616.45 metros cuadrados. Así, el efecto del fallo de amparo debe consistir en que el ejido quejoso sea restituido en el derecho de audiencia previa vulnerado o, en su caso, de existir imposibilidad jurídica o material para ello, se atienda a lo previsto en los artículos 204 y 205 de la Ley de Amparo”.

Por ello, refrendó que el efecto del amparo fue la condena de pago sobre determinada superficie de terreno, por lo que su cumplimiento original es pagar, puesto que la afectación fue demostrada ante el tribunal colegiado.

El señor Ministro ponente Laynez Potisek no compartió las últimas intervenciones porque existió un decreto expropiatorio para la construcción de la carretera, después



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

se celebró un contrato de obra pública y se amplió dicha carretera, para lo cual no medió decreto, sino que se ocupó ilegal e inconstitucionalmente el predio en cuestión.

Recapituló que el juez de distrito otorgó el amparo y, en el recurso de revisión, el tribunal colegiado, tras analizar la pericial, determinó la superficie por restituir, por lo que se trata de cosa juzgada y, en ese tenor, no es viable que en esta etapa del proceso la autoridad pretenda restituir una porción del terreno, sino que, como indicó el señor Ministro Pérez Dayán, solo resta realizar el avalúo, determinar el monto y que se pague.

Modificó el proyecto para precisar que, si el juez de distrito considera que el avalúo fue correctamente tramitado mediante las periciales desahogadas, no se le obligue a tramitarlas de nueva cuenta.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea se manifestó en favor del proyecto, con las modificaciones realizadas durante su presentación, mas no con las aceptadas recientemente.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena coincidió con el señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea, por lo que se apartará de las consideraciones y formulará voto concurrente.

El señor Ministro Pardo Rebolledo se pronunció en favor de la propuesta original y las modificaciones realizadas



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

durante la exposición del proyecto, porque la superficie afectada quedó definida.

La señora Ministra Luna Ramos diferenció entre la violación por la cual se concedió el amparo y los efectos que produce.

Concordó con el señor Ministro Pérez Dayán en que el tribunal colegiado cometió una incongruencia en cuanto a la violación analizada y el efecto impreso; sin embargo, esta Suprema Corte tiene facultades para interpretar correctamente los efectos, en el caso, si se le puede regresar o no parte del terrero, y si se le paga o no y, en su caso, cuánto.

El señor Ministro Medina Mora I. se posicionó en favor del proyecto con las modificaciones inicialmente aceptadas.

El señor Ministro ponente Laynez Potisek precisó que, en el engrose, en los avalúos deberá atenderse a la fecha a partir de la cual se dio la afectación.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada de los apartados V y VI relativos, respectivamente, al estudio y a la decisión, la cual se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz con salvedades en relación con la determinación de la porción del terreno materia del cumplimiento sustituto, Luna Ramos con salvedades en relación con la determinación de la porción del terreno materia del cumplimiento sustituto, Franco



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández con salvedades en relación con la determinación de la porción del terreno materia del cumplimiento sustituto, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. Los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos y Piña Hernández anunciaron sendos votos concurrentes.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales decretó un receso a las trece horas con seis minutos y reanudó la sesión a las trece horas con treinta y cinco minutos.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el siguiente asunto de la lista:

IV. 6/2017

Incidente de cumplimiento sustituto 6/2017, de la sentencia dictada el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, en el juicio de amparo 786/2013, promovido por [REDACTED]. En el proyecto formulado por el señor Ministro José Ramón Cossío Díaz se propuso: *"PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que resulta procedente el cumplimiento sustituto de la sentencia derivada del juicio de amparo 786/2013, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la Ciudad de León. SEGUNDO. Devuélvanse los autos al Juzgado Cuarto de*



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Distrito en el Estado de Guanajuato a efecto de que proceda en los términos precisados en el último apartado de esta resolución”.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta de los apartados I, II y III relativos, respectivamente, a los antecedentes, al trámite y a la competencia, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro ponente Cossío Díaz presentó los apartados IV y V relativos, respectivamente, a las consideraciones y fundamentos y a la decisión.

Narró los antecedentes del asunto: 1) el quejoso solicitó amparo en contra de la privación de la propiedad de una parte del inmueble de su titularidad, ocasionada por la construcción de un tramo de una obra carretera, 2) el juez de distrito lo concedió para el efecto de que la responsable lo restituyera la propiedad y posesión de la parte del inmueble afectada, 3) inconforme con dicha sentencia, diversas autoridades interpusieron recursos de revisión, 4) el tribunal colegiado dictó resolución que revocó la sentencia y ordenó la reposición del procedimiento, 5) el juez de distrito ordenó dicha reposición y dictó nuevamente sentencia para el efecto de restituir la propiedad y posesión del inmueble en la parte



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

afectada, 6) el quejoso solicitó la apertura del incidente de cumplimiento sustituto debido a la imposibilidad de restituir el inmueble, 7) el juez de distrito, en el dictamen elaborado, estimó que era procedente dicho cumplimiento sustituto y ordenó el envío a esta Suprema Corte para determinar lo procedente.

Señaló que el proyecto propone declarar procedente el cumplimiento sustituto de la sentencia, porque se estima que, en el caso, no es conveniente ejecutarla, ya que se afectaría a la sociedad en mayor proporción que los beneficios que el quejoso podría obtener.

Modificó el párrafo cincuenta y seis del proyecto para corregir que no se decreta de oficio el cumplimiento sustituto, sino que hubo un planteamiento específico. Asimismo, lo modificó para precisar que, para el desahogo de las pruebas periciales, se deberá aplicar la Ley de Amparo y no el Código Federal de Procedimientos Civiles.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada de los apartados IV y V relativos, respectivamente, a las consideraciones y fundamentos y a la decisión, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.



Sesión Pública Núm. 55

Jueves 15 de junio de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos.

Acto continuo, levantó la sesión a las trece horas con treinta y nueve minutos, previa convocatoria que emitió a los integrantes del Tribunal Pleno para acudir a la próxima sesión pública ordinaria que se celebrará el lunes diecinueve de junio del año en curso, a la hora de costumbre.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, quien da fe.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN